

# ¿«Chile como país modelo»? El preludio al estallido social de 2019

“Chile as a model country”? The prelude to the  
social outbreak of 2019

Raúl Cerro Fernández\*

Fecha de recepción: marzo 28 2024

Fecha de aceptación: octubre 29 2024

## Resumen:

Con una perspectiva ideacional, el presente artículo estudia el aterrizaje y la consolidación de la idea de “Chile como país modelo”, y posteriormente analiza su permeación en la élite política y la sociedad chilena desde 2006 hasta 2019. Así pues, se concluye que cuatro puntos cimentaron el mencionado paradigma: el modelo económico neoliberal, la lógica tecnocrática, el consenso y la estabilidad sociopolítica. Las cuatro presidencias que hubo entre 2006 y 2019 siguieron reproduciendo esta idea, con mayor o menor intensidad. En cambio, en la sociedad su permeación cada vez fue menor. Entonces en el momento que se produjo el estallido social, el paradigma de “Chile como país modelo” había calado fuertemente en la clase política, mientras que la ciudadanía se encontraba atravesada por una crisis de representación.

## Palabras clave:

*idea, país modelo, políticas, gobierno, Chile*

## Abstract:

From an ideational perspective, this article studies the landing and consolidation of the idea of “Chile as a model country”, and subsequently analyzes its permeation in the Chilean

---

\* Universidad Complutense de Madrid. Contacto: [racerro@ucm.es](mailto:racerro@ucm.es)

political elite and society from 2006 to 2019. It concludes that four points cemented the mentioned paradigm: the neoliberal economic model, the technocratic logic, consensus and socio-political stability. The four presidencies between 2006 and 2019 continued to reproduce this idea, with greater or lesser intensity. However, its permeation in society gradually decreased. By the time of the social outbreak, the paradigm of “Chile as a model country” had strongly permeated the political class, while the citizenry was going through a crisis of representation.

**Keywords:**

*Idea, Model Country, Policies, Government, Chile*

## I. Introducción

La consolidación de la democracia en Chile no sufrió ningún tipo de riesgos a raíz de la transición pactada que se llevó a cabo<sup>1</sup>. Weyland apuntaba a que el manejo de la Concertación de Partidos por la Democracia basado en los cambios graduales evitó la aparición de una “reacción populista” que podía poner en riesgo tal consolidación. El gobierno de Patricio Aylwin se alejó de las experiencias que habían padecido otras nuevas democracias de la región, como Brasil, Perú y Argentina. De esta manera, al asumir el modelo neoliberal legado por la dictadura, se centró en el mantenimiento del crecimiento económico combinado con leves reformas de carácter social (Weyland, 1997). Además, de acuerdo con Mainwaring & Scully (1996), el disponer de un sistema de partidos institucionalizado que se relacionaba con la estabilidad y la fortaleza de sus organizaciones partidarias le permitía a Chile mantener la democracia y fomentar un ejercicio efectivo del gobierno.

---

<sup>1</sup> Durante diecisiete años, Chile estuvo bajo una dictadura militar. Tras el derrocamiento de la presidencia de Salvador Allende a través de un golpe de Estado, el comandante en jefe del Ejército chileno, Augusto Pinochet, tomaba las riendas del país en 1973 y mantendría este gobierno de facto hasta 1990. Si bien, dicho régimen terminó con la victoria del “No” en el plebiscito de 1988, el retorno a la democracia se produjo por medio de una transición suave en la medida que se mantenían importantes legados autoritarios, siendo el principal el modelo económico orientado hacia el mercado.

Durante los primeros quince años desde la transición democrática, Chile sobresalió por el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la estabilidad política. Sin embargo, en la sociedad iba permeando una sensación de insatisfacción en relación con los pilares bajo los que se asentaba el sistema económico y político chileno. Desde la “Revolución pingüina” de 2006, el país fue viviendo distintas olas de protestas. La educación, en un principio, fue el motivo por el que la ciudadanía chilena inició las movilizaciones, pero en los siguientes años, especialmente en 2011 y 2012, se irían añadiendo otras cuestiones, como el medioambiente, la salud o las pensiones. Esta activación de la protesta suponía un esfuerzo por la politización de las desigualdades. Por consiguiente, lo ocurrido en la primavera de 2019 con el estallido social dio un vuelco a la idea de país que se había afianzado una vez se produjo el retorno a la democracia. Era algo que se venía gestando desde hacía tiempo, pero la fuerza de este proceso de efervescencia social lo hizo algo insólito, que no se había visto en protestas anteriores (Castiglioni, 2019; Roberts, 2014; Morán Faúndes, 2019; Güell, 2019).

El presente artículo se propone estudiar una idea concreta que estructuró el Chile post-transicional hasta el estallido. Esa idea es la de “Chile como país modelo”, que implicaría entender a este país casi como un caso anómalo dentro de una América Latina agitada. Para captar los rasgos bajo los que se asentaba, se hará un primer análisis de cómo aterrizó y se consolidó la idea de “Chile como país modelo”, que se extenderá desde la implantación del régimen autoritario hasta los primeros quince años de la vuelta de la democracia en el país. En la segunda parte, se pasará a la cuestión central de la investigación que es el estudio de dicha idea desde 2006 hasta 2019, revisando su permeación en la élite política y la sociedad chilena. La delimitación del 2006 al 2019 se debe a que fue una época en la que la élite política iba teniendo una menor permeación entre la ciudadanía, es decir, se estaba produciendo un progresivo desacople que vino acompañado de una repolitización y movilización en el terreno de lo social.

Previo al análisis de la idea de “Chile como país modelo” y el recorrido que tuvo del 2006 al 2019, se presentará una breve aproximación de los desarrollos teóricos de la corriente ideacional, que servirán como encuadre durante toda la investigación. Las ideas y los actores son un componente central de la política y el caso chileno no es ajeno a ello. La disputa política, en consecuencia, responde a una confrontación de intereses que necesitan a su vez de estrategias de argumentación destinadas a la legitimación de las afirmaciones.

## II. Marco ideacional: ideas y actores

El campo de las ciencias sociales vivió un período de efervescencia en los años noventa del siglo pasado con las contribuciones de autores como Peter Hall y sus “paradigmas de política”, que posibilitaron la aparición de un nuevo enfoque del comportamiento político y el desarrollo. Hall consideraba que era necesario ampliar la visión de las instituciones y los agentes que intervienen en la formulación de políticas, al igual que comprender cómo y por qué lo hacen (Berman, 2013). Este enfoque entonces centraba su atención en el poder político de las ideas. Eso quiere decir que la lógica de explicación partiría de la base de aquellos factores cognitivos, como también podrían ser afectivos, que estructuran el pensamiento de las personas (Parsons, 2007). Dado que el presente artículo asume tal marco, el cual es conocido como ideacional, se tienen en consideración los planteamientos de una serie de autores ideacionales que ayudarán a entender el tema central de la investigación.

El mismo Hall insistía que, para que se pudiese dar el cambio de paradigma, se requería de una batalla entre ideas (Garcé, 2015). En términos de Campbell (2002), los paradigmas son descripciones y análisis teóricos que se presuponen, hallándose en el trasfondo de los debates políticos, pero al final determinan relaciones de causa-efecto y restringen la gama de alternativas que los políticos pueden percibir como útiles. Algunos autores han

considerado los paradigmas un sinónimo de los “marcos de referenciales”. Este último término haría referencia a una estructura cognitiva y normativa que incorpora las creencias de los agentes en un marco más extenso. A pesar de la estrecha conexión que puede existir entre ambos por cómo relacionan los mecanismos de producción de significado y los conflictos por el acceso a una posición dominante en un área, no responden como tal a lo mismo (Muller, 2005).

En la elaboración de políticas interfieren diferentes tipos de ideas (Campbell, 2002). Los paradigmas son un tipo, pero también existen los programas, que son prescripciones de las élites que trazan un curso de acción claro; los sentimientos públicos, que se refieren a los supuestos de las personas que pueden constreñir las opciones disponibles de los tomadores de decisiones; y los marcos, que aluden a los símbolos y conceptos que permiten a las élites legitimar sus programas (Campbell, 2004).

Para que emerjan las ideas y adquieran influencia se necesitan actores. En este sentido, se puede diferenciar entre distintos agentes y sus respectivas contribuciones: los tomadores de decisiones se vinculan a los programas y son los portadores más próximos de ideas; los teóricos contribuyen a promulgar y sostener los paradigmas; los redactores se encargan de delinear los marcos pertinentes para movilizar a la gente; los constituyentes están relacionados a los sentimientos públicos y se puede diferenciar entre la población y las élites con poder de decisión; y, por último, los intermediarios de ideas o brokers, como los think tanks y los institutos políticos (Campbell, 2004).

Así, las instituciones fabrican y propagan ideas. Son un reflejo de las correlaciones de fuerzas entre actores (Garcé, 2015). Influyen, además, en el grado en que los agentes tienen la capacidad de acceder a las esferas de elaboración política (Campbell, 2002). En última instancia, siguiendo de nuevo la estela de Campbell (2002), este artículo busca evitar los obstáculos del viejo debate entre idealistas y materialistas sobre la naturaleza de la elaboración de políticas públicas. En cambio, opta por un enfoque más provechoso

que se basa en la revisión de cómo las ideas y los intereses interactúan y afectan mutuamente.

### III. «Chile como país modelo»: el paradigma

A fin de comprender la potencia de la idea de “Chile como país modelo”, es preciso situar su origen e identificar los principales puntos bajo los que se estructura. De este modo, habría que empezar a partir del establecimiento del régimen militar en 1973, puesto que, como recordaba Moulian (1997), supuso un proceso de “transformismo”.

Durante el gobierno de Salvador Allende, la conciencia de clase de los sectores capitalistas se agudizó, impulsando su capacidad de acción colectiva. El conocido “Club del Lunes” reunía el núcleo de la conspiración empresarial para derrocar a Allende. En tanto, se diseñó un programa económico llamado El Ladrillo en el que se reflejaba los intereses de los principales actores del entramado golpista (Silva, 2019). Los encargados de la redacción de dicho documento fueron los *Chicago Boys*, un grupo de economistas de la Universidad Católica de Chile que durante su estancia en la Universidad de Chicago tomaron los preceptos monetaristas desarrollados por Milton Friedman (Silva, 2008).

Una vez que el golpe de Estado fue exitoso, el general Augusto Pinochet terminó con el viejo esquema dominante de los años previos. Se optó entonces por una liberalización económica gradual, y los *Chicago Boys*, quienes defendían una liberalización radical, se quedaron en las posiciones de asesoría (Castiglioni, 2005). La liberalización gradual no duraría demasiado tiempo y a mediados de 1975 comenzaría una severa política de reestructuración económica. Este cambio hacia el neoliberalismo radical se explicaba por la consolidación del gobierno unipersonal de Pinochet, la alteración en las posiciones de la coalición capitalista dominante y las condiciones económicas nacionales e internacionales (Silva, 2019).

Los *Chicago Boys* fueron elegidos para ocupar los ministerios económicos clave. Esto implicaba la aplicación de políticas monetaristas, entendiendo el mercado como el ente más eficiente para la asignación de recursos, lo que redujo el rol del Estado en la administración e implementación de programas sociales y aumentó el protagonismo del sector privado (Castiglioni, 2005). De esta manera, entre 1978 y 1981, con el apogeo de los “neoliberales radicales”, se intensificaron las reformas económicas y sociales orientadas al mercado. En 1980 se redactó la Constitución que serviría para la institucionalización del régimen. Estos años coincidieron con el *boom* económico, creando una sensación de euforia en un país que tradicionalmente había sido pobre y austero. Sin embargo, lo que nadie preveía es que llegaría una crisis de deuda internacional en 1982 (Silva, 2019).

Durante la recesión, Pinochet se vio obligado a realizar varios cambios, aunque intentó conservar el modelo radical en la medida de lo posible. No obstante, con el ascenso de los “neoliberales pragmáticos” al interior del gobierno militar, se generó un estilo de la formulación de políticas más flexible. Gracias a la consolidación de este grupo de neoliberales y al éxito económico que hubo en los siguientes años, se dieron una serie de consecuencias importantes para el futuro desarrollo político de Chile. Por su parte, los grupos opositores fueron adquiriendo mayor notoriedad. Entre 1983 y 1984, comenzaron las primeras protestas masivas contra el régimen que fueron convocadas por la Alianza Democrática, una coalición que agrupaba al Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical y el Bloque Socialista, y también por el Movimiento Democrático Popular, una alianza de los comunistas con otras organizaciones izquierdistas. Posteriormente, a partir de 1985, la Alianza Democrática fue moderando su plataforma de política económica y poco a poco fueron haciendo más concesiones, lo que llevó a algunos capitalistas a no temer por sus derechos de propiedad en caso de que se produjese un cambio de régimen. Además, decidieron abandonar la vía de la movilización de masas y se concentraron por volver en contra las propias reglas del proceso de transición que habían sido elaboradas por el

gobierno militar. Así, se aseguraron de que se pudiese celebrar el plebiscito de 1988 y que las condiciones de votación fuesen justas y libres (Silva, 2009; 2019).

De cara al plebiscito, la Alianza Democrática pasó a llamarse la Concertación de Partidos por el No. Su campaña a favor de la vuelta a la democracia se sustentó en la aceptación del modelo económico neoliberal y en la promesa de que las cuestiones distributivas se abordarían dentro de los límites. Por el contrario, el régimen pinochetista, que promovía la opción del “Sí”, agitó una especie de campaña del miedo respecto a la amenaza que supondría un sistema democrático para la estabilidad y el crecimiento económico. No obstante, la victoria del “No” con el 54.7% de los votos en el plebiscito significó que, después de dieciséis años bajo el yugo de Pinochet, Chile volvía a ser un país democrático (Silva, 2019).

50

La transición fue suave. Debido a cómo se distribuía la autoridad gubernamental, la debilidad de los actores de veto y las posiciones ideológicas de los responsables políticos, se logró mantener este modelo con orientación hacia el mercado. La denominada “modernización conservadora” había supuesto una transformación profunda de la sociedad chilena, visible tanto en el ámbito económico como social (Faletto, 1991; Castiglioni, 2005; Silva, 2019). El triunfo de la oposición en el plebiscito se explicaba por haber atendido las demandas políticas de una sociedad que había estado sometida a un proceso de modernización intensa. Así, la movilización que lideraron los partidos políticos se centró en objetivos político-institucionales y no en aquellos económico-sociales (Tironi, 1990).

La dictadura tuvo la habilidad, a través de la combinación de terror, proyecto, coerción y astucia política, de lograr que su proyecto de clase se perpetuara aun con la transición democrática. El proyecto neoliberal que impuso el régimen autoritario produjo una sociedad del consumo que implicaba que entre la población primase el individualismo y la despolitización. El proceso «transformista» era exitoso en tanto se mantenía en la democracia las estructuras básicas desarrolladas durante la dictadura (Moulian, 1997;

Silva, 2008). En la sistematización de las “tradiciones autoritarias”, Morlino (2007) destacaba que el régimen militar chileno fue innovador en la medida que había logrado dotar de consistencia los aparatos institucionales del país a la vez que creaba (o reproducía) costumbres de comportamiento.

Un primer punto para entender la permeación del paradigma de “Chile como país modelo” en el sistema político y la sociedad chilena fue el mantenimiento del modelo político y de desarrollo neoliberal ideado en el período autoritario. La Constitución de 1980 fue crucial, debido a que lo institucionalizó. Además, la operación de marketing de la que hablaba Moulian contribuyó a la imagen de éxito económico. A través de una variedad de exageraciones semánticas (Chile jaguar, Chile puma, Chile líder, Chile desarrollado), se buscó realzar a nivel interno el orgullo por la patria y así suscitar una identificación con un paradigma, una idea-fuerza, “Chile como país modelo” (Moulian, 1997).

Para implementar este sistema económico orientado al mercado, la dictadura recurrió a una serie de economistas expertos, conocidos como los *Chicago Boys*, quienes llevaron a cabo la tecnocratización de la toma de decisiones. Este grupo de economistas se consideraban grandes conocedores de la ciencia económica moderna, la cual consideraban que funcionaba de un modo concreto, descartando la existencia de alternativas económicas. Por su habilidad para manejar la crisis y producir crecimiento económico, obtuvieron mayor relevancia en el gobierno y afianzaron el sesgo técnico que caracterizaba su proceder en la toma de decisiones. Sin embargo, la crisis a principios de la década de los ochenta deterioró la imagen que tenía la ciudadanía sobre los tecnócratas, aunque en los últimos años de la dictadura volvería a recuperarse con la entrada de los neoliberales pragmáticos, en especial por el rol desempeñado por el ministro de Hacienda, Hernán Büchi (Silva, 2008).

La tendencia favorable hacia la prominencia de los expertos también estuvo presente en los grupos opositores. Silva (2008) sostenía que la profesionalización de la oposición era consecuencia de un conjunto de dinámicas

sociales interrelacionadas puestas en funcionamiento después del golpe de Estado de 1973. Esto se debió, en parte, a que los políticos e intelectuales no alineados con la dictadura y que se quedaron en el país se vieron obligados a refugiarse en el ámbito académico (centros privados de investigación, organizaciones no gubernamentales, o *think tanks*) en tanto fueron privados de su fuente tradicional de ingresos, el Estado. A partir de la apertura del régimen, de acuerdo con Huneeus, se intensificó la participación de los expertos en la acción política de la oposición. Asimismo, señalaba dos iniciativas que contribuyeron a tal irrupción: la creación en 1987 del Comité Técnico, formado por sociólogos y politólogos pertenecientes a centros de investigación y que se encargaban de asesorar a la oposición; y la conformación del CIS, una iniciativa que reunía a varios académicos y fue trascendental en la campaña del “No” para el plebiscito de 1988 (Huneeus, 2014).

52

El paradigma de “Chile como país modelo” también implicaba dicha preferencia de la élite política por las soluciones técnicas. Con la transición democrática, coexistieron tanto la aceptación del modelo de desarrollo neoliberal y la despolitización de las cuestiones redistributivas como una tecnocratización acentuada de la formulación de las políticas (Castiglioni, 2005). La Concertación incorporó en su programa estos dos puntos con el objetivo de restaurar la democracia y ganarse la aceptación como un actor con la capacidad de gobernar el Chile actual, en la terminología de Moulian (1997). Prueba de ello fueron los denominados *technopols*, un poderoso grupo de actores con aptitudes tanto técnicas como políticas que dominaría durante los gobiernos concertacionistas (Joignant, 2011).

Después de la transición a través de un camino de reforma, comenzó el primer gobierno democrático bajo las órdenes de Patricio Aylwin, quien se había impuesto en las elecciones presidenciales de 1989. El marco que quiso imponer desde un principio el presidente concertacionista sobre lo que sería su mandato era el de “crecimiento económico con equidad”. Por un lado, este gobierno se centró en mantener la estabilidad económica y fiscal, y para ello se rodeó de un equipo económico especializado. La garantía para la go-

bernabilidad se basaba en una gran independencia del poderoso Ministerio de Hacienda y una colaboración continua con el sector privado, primando las políticas de consenso. Por otro lado, en el ámbito de la política social, promovió cambios graduales, por lo que las medidas adoptadas buscaron extender los beneficios a las personas con menos recursos y modificar el balance de poder sociopolítico. En suma, en este gobierno concertacionista, como en los siguientes, la política social se elaboró a partir del modelo de desarrollo económico y estuvo sujeta a los resultados macroeconómicos (Weyland, 1997; Castiglioni, 2005; Silva, 2008; Huneeus, 2014; Silva, 2019).

Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue el sucesor de Aylwin en la presidencia de Chile. El mandato de su predecesor estuvo marcado por lo que había supuesto la transición al ponerse sobre todo el foco en mantener la situación económica en buen estado y evitar el malestar entre el estamento militar y las élites empresariales. La «transversalidad» había sido un elemento crucial durante dicho gabinete. Por su parte, el presidente Frei buscó aplicar tras su llegada a La Moneda un programa refundacionista bajo el nombre Un Gobierno para los Nuevos Tiempos y cuyo eje principal era la “modernización”. Así pues, al aplicar el marco de los “nuevos tiempos”, la agenda de gobierno era más de corte técnico y económico. No obstante, la crisis asiática y las amenazas del fin del crecimiento económico provocaron que Frei se acabase centrando en su supervivencia política y dejase de lado la agenda modernizadora. Este cultivó una presidencia menos consultiva y más personalista (Silva, 2008; Mella, 2011).

Durante el mandato del segundo presidente concertacionista, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó un informe en 1998 titulado “Las paradojas de la modernización”, en el que se señalaba el malestar difuso que venía aparejado del proyecto de la modernización y que se plasmaba en la inseguridad de la ciudadanía (PNUD, 1998). De esta manera, tras ocho años en el gobierno, se creaba un debate al interior de la Concertación entre aquellos que se mostraban satisfechos, los denominados “autocomplacientes”, y los que estaban disconformes, los

“autoflagelantes”. Se comenzaba a percibir entre la población chilena un cierto descontento por el rumbo de las políticas públicas, que si bien habían mantenido el crecimiento económico y reducido la pobreza, la desigualdad seguía siendo un problema. La actualización programática de la Concertación se ponía entonces a debate (Silva, 2008; Mella, 2011; Huneus, 2014; Guzmán *et al.*, 2017).

La Concertación se mantendría una vez más en el poder con la victoria electoral de Ricardo Lagos, el primer presidente socialista desde el derrocamiento de Salvador Allende. Pese a esto, las elecciones presidenciales de 1999-2000 se tuvieron que definir en segunda vuelta, las cuales ganaría Lagos por un escaso margen ante Joaquín Lavín, el candidato de la oposición. Este hecho mostró lo que algunas figuras de la Concertación ya advertían y es que para obtener la confianza de los votantes no solo bastaba con la atención por el desempeño económico. Por otra parte, al inicio de su mandato, Lagos se vio obligado a incidir de que no transformaría la economía y seguiría una línea continuista con las dos administraciones que le precedían. Tal temor de una parte de la clase empresarial derivaba del eslogan que empleó Lagos en la primera vuelta de los comicios de 1999, “crecer con igualdad”, especialmente con la parte de “igualdad”, que se relacionaba con una redistribución radical de los ingresos. Por ello, a lo largo de su sexenio, adoptó un estilo que combinaba el pragmatismo con su parte de estadista (Silva, 2008; Huneus, 2014).

En comparación con Aylwin y Frei, quienes venían de la moderada Democracia Cristiana (o Partido Demócrata Cristiano), Ricardo Lagos mostró desde un primer momento disponer de una visión más social, buscando atenuar algunos de los aspectos más destacados del modelo heredado. Se podría mencionar la introducción el Sistema de Protección Social Chile Solidario, que fue una propuesta centrada en la atención de familias con menores ingresos, y el Plan de Garantías Explícitas en Salud (AUGE-GES), que permitía la ampliación del acceso por parte de la ciudadanía a los tratamientos de las enfermedades más comunes del país. De igual modo, este

presidente se propuso avanzar en la modificación de la Constitución de 1980 para terminar con ciertos “enclaves autoritarios” que aún permanecían, y con esa intención llevó a cabo la reforma del año 2005. La reforma de la Carta Magna suprimió los conocidos como senadores institucionales y la autonomía de las Fuerzas Armadas. Por todo lo que abarcaba, constituía la principal reforma que se había hecho de la Constitución de 1980, aunque todavía permanecía su núcleo central y además tampoco se lograba modificar el sistema electoral binominal, el cual beneficiaba a los partidos políticos de la derecha (Atria *et al.*, 2013; Huneeus, 2014; Castiglioni, 2018; Farías & Toro, 2020).

Los avances en materia social se veían limitados por los constreñimientos del propio modelo económico y las presiones tan efectivas de los poderosos actores promercado, que contrastaba con la debilidad de las asociaciones de la sociedad civil (Castiglioni, 2018). A causa del diseño estatal, la figura del presidente se encontraba limitado igualmente por instituciones como el Banco Central o el Tribunal Constitucional. Con los diferentes constreñimientos a los que se veían sometidos las autoridades elegidas por la población, Chile por ese tiempo podría encuadrarse en una “democracia semisoberana” (Huneeus, 2014).

El paradigma de “Chile como país modelo”, tras los primeros quince años de democracia, adquiriría nuevos rasgos, sin perder los esquemas del modelo neoliberal y la lógica tecnocrática de las élites políticas. Esos nuevos rasgos podrían resumirse en dos: la primacía del consenso por parte de los líderes concertacionistas, también denominada por Siavelis (2016) como “democracia de los acuerdos”, debido a las limitaciones que se ejercían desde la propia Constitución, las clases propietarias y la derecha política; y la estabilidad sociopolítica dada la existencia de un tipo de “empate político” (Silva, 2008) y que se conectaba a su vez con el primer punto. Todo ello permitía seguir estructurando este tipo de idea como algo común que permeaba en toda la sociedad chilena y adquiriría prestigio internacional por proyectarse como un ejemplo que entroncaba perfectamente con el proyecto de la

globalización tan en auge en aquellos años. En definitiva, era un paradigma que engullía todo tipo de alternativa y gracias a dicha capacidad podía restringir la toma de decisiones al igual que el cambio institucional. Como diría Campbell (2004), funcionaba como “cerrojo cognitivo”.

#### IV. Cuando la crisis de representación quedó palpable

##### a) Una crisis de baja intensidad (2006-2012)

A principios del año 2006, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Michelle Bachelet se imponía frente al derechista Sebastián Piñera. Por cuarta vez, la Concertación retenía el control de La Moneda. Desde la coalición oficialista, se seleccionó a Bachelet por representar una imagen de renovación y fresca. Sus afinidades ideológicas, al estar afiliada al Partido Socialista y situarse más a la izquierda, podían suponer un revulsivo ante los signos de agotamiento que presentaba la Concertación tanto a nivel interno como externo (Siavelis, 2010). Ya en la campaña, Bachelet había incidido en un discurso de corte antitecnocrático, reflejado en uno de sus lemas: “No a los tecnócratas, sí a la gente”. Ese hincapié por la participación de la ciudadanía se convirtió en la promesa de su gobierno una vez que ganó los comicios presidenciales. La promesa del “gobierno ciudadano” era el marco a través del que buscaría articular y legitimar su toma de decisiones (Mardones, 2007; Silva, 2008).

En la conformación de su gobierno, la nueva presidenta optó por asegurar la paridad de género y las caras nuevas. Sin embargo, desde el primer momento fue difícil de cumplir, ya que, además de los dos objetivos mencionados, también debía garantizar el *cuoteo*, es decir, el criterio que seguían desde el concertacionismo para asegurar la presencia en el gabinete gubernamental de todos los partidos de la coalición. El *cuoteo* se había señalado como una de las instituciones informales claves que aseguraron la gobernabilidad durante los gobiernos de la Concertación. Tras las presidencias de Aylwin y Frei, este sistema de “integración horizontal”, que preservaba

la cooperación entre partidos, fue visto paulatinamente entre la población como un recurso orientado a otras metas de relaciones públicas, como una forma de distribuir el botín político entre las élites partidarias. Así, Bachelet inició su mandato rodeada de ministros sin experiencia y sin un grupo fuerte de consejeros políticos (Altman, 2006; Siavelis, 2010; Huneus, 2014).

El marco del “gobierno ciudadano” se vería repentinamente concluido cuando, en mayo de 2006, dos meses después de haber iniciado el mandato, los estudiantes de secundaria de Santiago llamaron a salir a las calles para pedir mejoras en la calidad de la educación. La dictadura había reformado esta área a partir de los principios orientados al mercado y como consecuencia había pasado a ser un sistema activo de reproducción de las desigualdades, pese a los grandes cambios que se realizaron en las administraciones anteriores. El origen de la denominada “Revolución pingüina”, un nombre que hacía referencia a los uniformes blancos y negros de los estudiantes de secundaria, se situaba a finales de 2005, cuando el Ministerio de Educación presentó un informe con una serie de reformas que implicaban mejorar las condiciones de los estudiantes, pero al coincidir con unas nuevas elecciones y el cambio de gobierno, quedó en el olvido. La protesta llegó a movilizar en la capital chilena en torno a 200 mil estudiantes de secundaria y en el resto del país unos 120 mil, además de obtener el respaldo de la opinión pública (Castiglioni, 2005; Silva, 2008; Donoso, 2017).

Para canalizar el conflicto con el estudiantado, la presidencia creó inmediatamente después el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación y, al mismo tiempo, se produjo la primera reestructuración gubernamental con las salidas de los ministros del Interior y de Educación. Bachelet se centró en abordar las cuestiones nacionales, como la educación, a partir de la opinión de los expertos y de los diferentes sectores de la sociedad civil (Silva, 2008; Donoso, 2017; Guzmán *et al.*, 2017). Silva (2008) indicaba que este tipo de enfoque fue definido por Peter Evans como “autonomía integrada”, el cual consistía en la apertura de la consulta por parte de la tecnocracia gubernamental a los representantes sociales, pero al final es-

tos primeros disponían de una autonomía relativa que les permitía la toma de las decisiones definitivas.

En la remodelación del gabinete, se produjo la vuelta de algunos exministros con la intención de combinar esa lógica tecnocrática que ya existía con la experiencia que aún faltaba. La “Revolución pingüina” había sido una movilización social sin precedentes hasta el momento (Huneus, 2014; Somma & Medel, 2017). Adicionalmente, en este período de tiempo, ocurrió otro acontecimiento, aunque de menor envergadura, como fue la crisis del Transantiago. Dicho programa, dedicado a la modernización del transporte público en Santiago, fue diseñado durante el gobierno de Lagos, pero su lanzamiento en febrero de 2007 estuvo marcado por una variedad de problemas en su implementación, derivando en protestas, una caída en la aprobación gubernamental y un desprestigio gradual de los cuadros técnicos (Silva, 2008; Guzmán *et al.*, 2017).

58

A partir de 2008, la opinión pública valoró de mejor manera el desempeño de la presidencia bacheletista (Huneus, 2014) y, para entender esa tendencia ascendente, habría que considerar dos de los programas sociales que se implementaron. En primer lugar, la reforma de pensiones fue una de las prioridades principales de este primer gobierno de Bachelet, por lo que en 2008 introdujo el pilar básico solidario que implicaba que el 40% de las personas con menores recursos recibirían una pensión de vejez (para los mayores de 65 años) o una pensión de invalidez (para las personas discapacitadas entre 18 y 65 años). En comparación con la reforma del sistema de salud de Lagos, cuya propuesta original se modificó significativamente, la de las pensiones se hizo de modo que la mayoría de lo propuesto se aprobase. Al existir un modelo de capitalización individual, los agentes de mercado vinculados a los servicios sociales, como las administradoras de fondos de pensiones (AFP), contaban con un poder de veto capaz de afectar en el cambio de políticas, de ahí que el gobierno adoptase el tradicional enfoque concertacionista de no confrontación y la propuesta presentada se acabó formulando a partir de los costes fiscales que podría producir potencial-

mente. Asimismo, esta capacidad de los actores de mercado con recursos sustanciales a nivel económico y técnico y con acceso directo a los legisladores contrastaba con unas asociaciones de la sociedad civil endebles (Castiglioni, 2018).

En segundo término, tras unos años de deliberaciones, en 2009 se derogó finalmente una parte significativa de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), aprobándose la Ley General de Educación (LGE). Este cambio fue el principal resultado de las movilizaciones estudiantiles de 2006, aunque en la práctica no modificó el espíritu del modelo, persistía la lógica neoliberal. Para aprobarse la LGE, se necesitó que en el Congreso hubiese un consenso entre la Concertación y la Alianza. A pesar de que dicho episodio se puso como un ejemplo de la existencia de madurez de la clase política, en el estudiantado permanecía la insatisfacción al no atenderse sus principales demandas (Luna *et al.*, 2012; Atria *et al.*, 2013; Donoso, 2017).

Aunque la presidencia de Bachelet tuvo un inicio turbulento, sus dos últimos años de mandato estuvieron marcados por un aumento sustancial de su aprobación. Su gobierno se caracterizó por una primera etapa más agitada y una segunda marcada por la estabilidad y la proactividad (Garretón, 2012). No obstante, fueron años en los que consolidó la tendencia a la desafección política (Castiglioni, 2010; Huneeus, 2014). El paradigma de “Chile como país modelo” iba dejando de tener el mismo efecto entre la clase política y la élite económica que entre la ciudadanía chilena. El modelo económico, la lógica tecnocrática, el consenso y la estabilidad sociopolítica seguía permeando en la política institucional, pero a su vez limitaba la toma de decisiones y el cambio. Mientras tanto, iba perdiendo esa capacidad de articulación en la población.

A pesar de los altos índices de aprobación de Bachelet, la Concertación no logró ganar por quinta vez las elecciones presidenciales tras la restauración democrática. La candidatura del expresidente Eduardo Frei, por una Concertación que estaba enfrentando problemas de unidad no consiguió derrotar a Sebastián Piñera, el candidato de la Alianza. Se materializó la

alternancia, lo que podría entrañar un nuevo impulso para la democracia chilena (Luna & Mardones, 2010).

El nuevo presidente de Chile, Sebastián Piñera, estableció el marco de una “nueva forma de gobernar”. Con ello, pretendía llevar a cabo una gestión basada en los criterios de eficacia y eficiencia y en el que el personal elegido contase con un marcado perfil técnico. Sin embargo, su agenda de gobierno se vio inicialmente trastocada con los efectos provocados por el terremoto y el maremoto del 2010, así como por el accidente minero ocurrido ese mismo año. El 2011, tuvo que hacer frente a otros desafíos no previstos. Debido a la importancia de estos últimos, la conducción del gobierno varió, adoptando una línea más política (Segovia & Gamboa, 2012; Undurraga, 2012).

60 Durante el segundo año de la administración de Piñera, destacaron las protestas del movimiento estudiantil, la Confech (Confederación de Estudiantes de Chile), que demandaban un cambio estructural en el sistema educativo chileno. Con el paso de los días, al ser cada vez más masivas, se fueron incorporando otras cuestiones. Marcaron un punto de inflexión porque se impugnó la mayoría de las dimensiones del modelo chileno. Además de la educación, se incorporaron temas ambientales, de salud, de pensiones, de género, hasta el cambio de la Constitución de 1980 (Atria *et al.*, 2013; Donoso, 2017; Mascareño *et al.*, 2023). La “Revolución pingüina” de 2006 marcó un precedente, y debido a que la aprobación de la LGE, el principal resultado conseguido en términos institucionales, no colmó las expectativas del estudiantado, volvieron cinco años después con más fuerza y con la destreza de poder interpelar a otros grupos de la sociedad.

La educación, junto con la salud, era un tema prioritario para la ciudadanía chilena, correlacionaba positivamente con un mayor reclamo por las políticas redistributivas (Luna *et al.*, 2012). El “despertar ciudadano”, como dirían Toro & Mardones (2016), implicó que en el 2011 la protesta en Chile se ampliase de sobremanera con respecto al año anterior (Luna & Toro, 2013). El número de protestas como la cantidad de personas que partici-

paron en ellas aumentaron entre 2003 y 2012 (Somma & Medel, 2017). En consecuencia, la desafección con la política institucional creció, produciéndose “una discontinuidad entre el sentido común de la clase política versus el sentido común ciudadano” (Mardones, 2014, p. 56). Ante la apatía y la desafección con el sistema político, una parte de la ciudadanía se decidía por otros mecanismos de participación alejados de los canales institucionales (PNUD, 2019).

Con los niveles de movilización social más altos desde 1990, la agenda política quedó definida por otro tipo de temáticas a las que preveía el gobierno. En un primer momento, se planteó el proyecto GANE (Gran Acuerdo Nacional de la Educación), que suponía una inyección de recursos, pero no era una reforma estructural del sistema, que es lo que se pedía. El rechazo de este proyecto contribuyó a la salida del ministro de Educación, Joaquín Lavín (Segovia & Gamboa, 2012). Este ministerio tuvo que reemplazarse hasta en tres ocasiones (Donoso, 2017). Desde las movilizaciones hasta 2013, la administración de Piñera presentó cuatro proyectos de alto alcance en educación superior y ninguno de ellos se aprobó: reforma constitucional sobre calidad y financiamiento (2011), creación de la Superintendencia de Educación Superior (2011), creación de mecanismo único de financiamiento (2012), y creación de una Agencia Nacional de Acreditación (2013). El enfoque de las políticas educativas que se proponían se asentaba en la política de financiamiento y la focalización de mejoras a nivel micro. Fueron años en los que primó una línea continuista, sin cambios estructurales (Castiglioni & Serrano, 2018).

En el ámbito de las reformas políticas, se promulgaron dos proyectos durante el mandato de la Alianza que buscaban estimular la implicación de la ciudadanía en los procesos electorales, dado que iba en aumento esa desafección con la política institucional. Por un lado, la introducción de la inscripción automática y el voto voluntario conllevaba la renovación del padrón electoral, rejuveneciendo a su vez el electorado. El régimen de Pinochet había mantenido el sistema de voto obligatorio solo para aquellos

ciudadanos que se hubiesen inscrito previamente. Así, desde que se observó que la tendencia de la participación a finales de 1990 iba a la baja, el gobierno de Lagos impulsó el cambio del voto obligatorio al voluntario. Su aprobación se produciría en el de Bachelet, aunque fue en el de Piñera cuando se promulgó como ley orgánico-constitucional (Morales Quiroga & Contreras Aguirre, 2017). Por otro lado, la ley de primarias para los cargos de elección popular (presidente, senador, diputado y alcalde) constituyó el otro gran proyecto implementado. Las primarias, una propuesta presentada por el gobierno de Bachelet, era un mecanismo voluntario y vinculante y se consideraba que fortalecería a los partidos. Para estos dos programas, se necesitó el acuerdo de gobierno y oposición y además emergieron a raíz de los informes presentados por diferentes centros de investigación privados (Huneus, 2014).

62

Lo llamativo es que este complejo panorama político en Chile no se daba en tiempos de crisis económica. El desempeño de la economía en términos de crecimiento era bueno, el desempleo era bajo y la pobreza se había reducido. Además, la “crisis del Atlántico Norte”, como la denomina Ocampo (2020), en esa época no había generado repercusiones serias (Atria et al., 2013). Pese a esto, no se había paliado la desigualdad y la exclusión tanto social como política eran preocupantes (Saavedra, 2014).

La Concertación había hecho suyo el paradigma de “Chile como país modelo”, añadiéndole un énfasis más democrático. Tras veinte años en el poder, esta alianza de partidos de centroizquierda mostró los límites de un paradigma que solo mostraba cohesión en el nivel de las élites, pero que dentro de la sociedad ya no se veía de la misma manera. En este punto, la derecha llegó a la presidencia, habiendo asumido que debía moderarse y aceptar ciertas proclamas concertacionistas para ser competente en la contienda electoral (Madariaga & Rovira Kaltwasser, 2019). Sin embargo, tampoco mostró la capacidad de hacerse cargo de las demandas que provenían de una mayoría de la población chilena. Por tanto, rasgos de dicho paradigma como eran el consenso y la estabilidad únicamente se daban al

interior de las élites políticas. Luna (2016b) apuntaba que durante esos años tenía lugar “crisis de baja intensidad” debido al desacople que se estaba produciendo entre los partidos y la sociedad chilena. Posteriormente, con lo ocurrido en el 2011, se transformaría en una crisis de legitimidad (Luna, 2016a; Garretón, 2012).

### **b) Sensibilización de la élite política: ante el preludio del estallido (2013-2019)**

La exigencia de reformas de calado pasó a ser un asunto relevante durante la campaña electoral del 2013. Michelle Bachelet, candidata por la Nueva Mayoría<sup>2</sup>, fue elegida en las elecciones presidenciales de ese año, por lo que gobernaría Chile por segunda vez. Además de proyectar una imagen renovada, su campaña se centró en recoger las demandas procedentes de la ciudadanía, buscándolas insertar en su agenda política. De este modo, la victoria de la Nueva Mayoría no solo se dio en los comicios presidenciales, sino que también obtuvo mayorías significativas en la Cámara de Diputados y el Senado (Altman & Toro, 2016).

Con las mayorías obtenidas, el gobierno de Bachelet consideraba que tenía el cometido de poner en marcha reformas estructurales en el país. Igualmente, la coalición oficialista podía ser más audaz en la presentación de proyectos de ley debido a que los legisladores de la oposición contaban con un escenario más adverso. En otras palabras, los actores de veto más conservadores no disponían de la fuerza necesaria para incidir en la agenda. Entonces, durante el primer año, planteó tres ejes de reforma a partir del impulso de cambio emprendido por la ciudadanía: reforma tributaria, educativa y del sistema electoral (Altman & Toro, 2016; Farías & Toro, 2020).

Respecto a la tributaria, fue la primera de las reformas y la creación de una nueva ley se realizó con la intención de poder llevar a cabo las promesas de cambio. Por la gradualidad en su aplicación, buscando no dañar

---

<sup>2</sup> La Nueva Mayoría era una alianza que integraba a la antigua Concertación y se le sumaba el Partido Comunista, la Izquierda Ciudadana y el Movimiento Amplio Social.

los indicadores macroeconómicos, y el impacto de los sectores políticos y gremiales se consiguió cumplir el primer paso. Tras ello, era el turno de la reforma del sistema educativo. En el diseño del paquete, los conflictos, aparte de los que procedían de la oposición, también existieron al interior de la propia Nueva Mayoría, sobre todo con los sectores democristianos. No obstante, el empuje de Bachelet permitió que una serie de reformas en materia educativa saliesen adelante: la gratuidad de la educación primaria y secundaria y, para las familias con menos recursos, también la superior; la “desmunicipalización”; y una nueva carrera docente en la primaria y secundaria. El enfoque seguido en este caso entrañaba cambios estructurales a nivel macro (Altman & Toro, 2016; Acevedo *et al.*, 2016; Castiglioni & Serrano, 2018; Faure & Maillet, 2021).

La eliminación del sistema electoral binominal por uno más proporcional completaba la triada de reformas que se abordaron en el primer año de dicho mandato. Bajo el binominalismo, los partidos y las coaliciones presentaban habitualmente dos candidatos por cada distrito (o circunscripción en caso del Senado) y cada votante elegía a un candidato. Al acumularse los votos por coalición y luego repartirse, los dos candidatos elegidos solían ser de la misma adscripción política, puesto que lo normal es que su partido o coalición duplicase (o más) a la organización que le seguía en el número de votos (Altman, 2008). Era una de esas herencias de la dictadura que aún permanecían y estaban destinadas a reforzar la representación de los partidos de la derecha (Londregan, 2000). Así pues, se disminuyó el número de distritos de diputados (de 60 a 28), se elevó el número de diputados (de 120 a 155) y de senadores (de 38 a 50), y se instauró un sistema de cuotas que favoreciese a una mayor representación de las mujeres (Fuentes, 2017). Este cambio fue potente en términos simbólicos, pero adolecía de algunas carencias. No solo porque no conseguía resolver del todo la exclusión sistemática de las terceras fuerzas, sino porque, en un contexto marcado por la lógica antipartido, potencialmente reducía la capacidad de acción colectiva de las organizaciones partidarias y cultivaba el voto personalista (Altman, 2016).

Después de este empuje transformador inicial, se revelarían una serie de casos de corrupción que perturbarían el rumbo de la segunda presidencia bacheletista. El caso SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) que salpicaba a diferentes candidatos y partidos por haber sido financiados irregularmente; el caso Caval, en el que estuvieron salpicados familiares de la presidenta; y las investigaciones acerca de las conexiones entre los negocios de Sebastián Piñera y decisiones concretas que tomó durante su mandato estuvieron entre los principales escándalos de corrupción de aquella época y que apuntaban a varias partes del sistema político chileno. En consecuencia, a inicios de 2015, la presidenta Bachelet estableció un Consejo Asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, también conocido como “Comisión Engel”. Esta vez no valía un “acuerdo a puertas cerradas”. A partir de las recomendaciones que salieron de la Comisión Engel, desde el gobierno se fijó una agenda política destinada a la regulación de ciertos aspectos de la política chilena para evitar más escándalos similares (Fuentes, 2017; Bunker, 2018; Barozet *et al.*, 2020; Jiménez-Yañez, 2020).

Entre 2016 y 2017, en el Congreso se aprobaron: el establecimiento de límites más rigurosos a las donaciones y gastos totales de campañas, la regulación de mejor manera de los procedimientos de tales donaciones, el esclarecimiento de los nexos entre donantes y candidaturas y partidos, la reforma de la estructura interna de los partidos, proveyéndoles mínimos recursos para su ejecución, y el establecimiento de controles efectivos para regular el proceso (Fuentes, 2017). A pesar de las reformas, en la población crecían los sentimientos de escepticismo acerca de la honestidad de todo el *establishment* chileno. Además, se percibía como una reacción tardía, cuando ya esos escándalos habían erosionado la credibilidad con la que contaban las instituciones políticas del país (Luna, 2016a; Castiglioni & Rovira Kaltwasser, 2016; PNUD, 2019).

El último gran proyecto impulsado por el gobierno de la Nueva Mayoría fue el intento de reforma de la Constitución de 1980. La Carta Magna había

servido como un dispositivo para preservar el modelo político, social y económico desarrollado durante la dictadura (Atria et al., 2013). Sin embargo, las protestas del 2011 supusieron un punto de inflexión, porque desde una parte importante de la ciudadanía emergía un cuestionamiento al funcionamiento de diferentes aspectos bajo los que se asentaba el modelo chileno. En este sentido, poner fin a la Constitución vigente encapsulaba en parte esas demandas de cambio. Atendiendo a esto, y a la campaña realizada por el movimiento “Marca Tu Voto”, Bachelet incorporó la demanda de una nueva Constitución en su campaña de las elecciones del 2013. Una vez fue electa como presidenta, a finales de 2015 dio inicio al proceso constitucional. La primera parte estuvo marcada por la participación de unas 200 mil personas que constituía un ejercicio preparatorio de la discusión constitucional. El siguiente paso, tras haber sido entregadas las denominadas “Bases Ciudadanas” a la presidenta, fue la elaboración de la nueva Constitución en el plazo de un año. La propuesta de reforma, marcada por su énfasis en los derechos humanos, fundamentales y sociales, fue enviada al Congreso por la presidenta Bachelet en los últimos días de su segundo mandato, aunque el texto no se tramitó con la llegada de Sebastián Piñera a La Moneda (Mascareño et al., 2023).

66

Michelle Bachelet, quien se caracterizó por un estilo de gobierno personalista como se podía comprobar en su eslogan de 2013 “Todos con Michelle”, inició su segunda presidencia acometiendo una serie de reformas a fin de dar una rápida respuesta a las principales demandas que provenían de la sociedad civil. Ese ciclo transformador lo continuó en los siguientes años con más reformas relativas al sistema político, así como a la expansión de la protección social y a la lucha contra las diferentes formas de discriminación (PNUD, 2019). No obstante, terminó lastrada por los escándalos de corrupción que se revelaron en ese tiempo y las complicaciones en el ámbito económico. El marco de «realismo sin renuncia», el cual había introducido en la mitad de su mandato y que buscaba dar gradualidad a sus compromisos debido a las condiciones de la economía, en vez de dar un impulso, compli-

có aún más su posición en el gobierno (Luna, 2016a; Faure & Maillet, 2021). Si bien en un principio Bachelet tuvo la habilidad de leer acertadamente la coyuntura sociopolítica, acabó sumida en las dinámicas que eran propias del paradigma de “Chile como país modelo”. Esto es, plantear soluciones a problemas a partir de una lógica tecnocrática y creer que tenía el apoyo de la mayoría de la población cuando en realidad esos consensos a los que apelaba eran un tanto reducidos.

En las elecciones presidenciales de 2017, la victoria fue para la derecha chilena, representada nuevamente por la candidatura de Sebastián Piñera. La contienda se resolvió en el balotaje entre las dos coaliciones que habían dominado la escena política en Chile en los últimos treinta años: la Concertación-Nueva Mayoría y la Alianza-Chile Vamos. En tanto, los comicios legislativos, marcados por el estreno del nuevo sistema electoral, arrojaron novedades al surgir un escenario compuesto por tres (o cuatro) alianzas diferentes, considerando al Frente Amplio y Convergencia Democrática. El sistema partidario vivía un proceso de cambio, puesto que se generaba una dinámica en el que los costos de negociación entre las fuerzas serían más altos. Ahora bien, la reforma del sistema electoral, en términos generales, mantuvo la conjunción de altos niveles de estabilidad electoral y desarraigo social (Toro & Valenzuela, 2018; Bunker, 2018; Cruz & Varetto, 2019; Titelman, 2021).

El marco de los “tiempos mejores” fijado por Piñera iba a ser complejo de llevarse a cabo. Era un gobierno que contaba con unos bajos niveles de adhesión, por lo que suponía un marco problemático para legitimar la variedad de decisiones que buscaría implementar. Comenzó su segunda presidencia creyendo que la mayoría relativa que había logrado, cuando la participación había sido de algo menos de la mitad del electorado, entrañaba disponer de un mandato contundente de parte de la totalidad de la ciudadanía. Existía un error de diagnóstico en la derecha chilena porque su programa político no acababa de sintonizar con esas posturas de la ciudadanía que se había vuelto en lo social más liberal y en lo económico más

redistributiva. Sus predecesores en la presidencia también habían llevado a cabo un diagnóstico muy similar, creyendo que la mayoría lograda implicaba disponer de un mandato total (Castiglioni, 2019; Güell, 2019; Rovira Kaltwasser, 2020). Sin embargo, fue durante la presidencia de Piñera cuando ocurriría el estallido social en la primavera de 2019.

Tabla 1. Votación por los candidatos presidenciales de Chile que fueron electos en función de la población en edad de votar (2005-2017)

	Año	Población en edad de votar	Votos	%votos PEV
Michelle Bachelet	2005	11.322.769	3.723.019	32.9
Sebastián Piñera	2009	12.180.403	3.591.182	29.5
Michelle Bachelet	2013	13.573.143	3.470.055	25.5
Sebastián Piñera	2017	14.347.288	3.796.579	26.5

Fuente: Contreras Aguirre & Morales Quiroga (2014).

El estallido social de 2019 fue una acumulación de descontento y una total impugnación contra el *statu quo*, convirtiéndose en uno de los hitos más importantes del Chile reciente. Suponía la materialización del desacople entre la élite política y el pueblo. El paradigma de “Chile como país modelo” era derrumbado por una ciudadanía que sintonizaba con otros tipos de relatos. Mientras tanto, el sistema político reaccionaba de forma impasible ante algo que no predecía, que no creía que pudiese hacerse realidad.

### c) Una ciudadanía desacoplada, los sentimientos públicos y la evidencia empírica

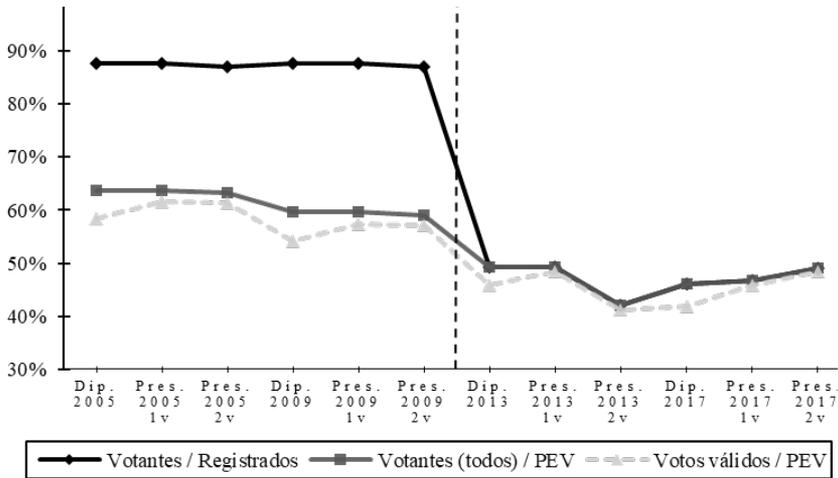
El descontento en la sociedad, que culminó con el estallido de 2019, no fue algo espontáneo o que surgió en el corto plazo, sino que fue producto de una sucesión de hechos que habían ocurrido en la última década. Para poder señalar la existencia de una crisis de representación política, hay que

considerar ciertos indicadores relacionados con los procesos electorales y los barómetros de opinión pública. Así pues, se consideraron un conjunto de medidores que recorren el período de tiempo analizado en la segunda parte del presente artículo, de 2006 a 2019.

En primer lugar, respecto a la participación electoral, la Figura 1 muestra su evolución en las elecciones de carácter nacional celebradas en Chile entre el 2005 y el 2017. Lo más destacado de dicho gráfico es la caída de diez puntos en la participación entre las elecciones de 2009 y las de 2013. Esto se debió al cambio de un sistema de registro voluntario y voto obligatorio a uno de registro automático y voto voluntario. Aunque la caída de la tendencia del total de votos en función de los habitantes registrados fuese más abultada, la realmente importante es la que considera al total de la población en edad de votar por dos motivos: el primero es que el sistema de voto que funcionó hasta 2009 producía unos datos de participación inflados, era un espejismo; y el segundo es que el nuevo sistema que se implantó no funcionó al no incentivar el voto a un mayor grueso de la población, sino que produjo los efectos contrarios. Desde 2013, la participación se mantuvo por debajo del 50%.

En tanto, atendiendo a la Figura 2, la satisfacción de los chilenos con la democracia no fue contundente en ningún momento. Si bien en 2006 la principal respuesta era “más bien satisfecho”, en los siguientes años, excepto en 2009 y 2010, el “no muy satisfecho” se convirtió en la respuesta con mayor apoyo. El “muy satisfecho”, en cambio, mantuvo en gran medida escaso respaldo de la población, y la respuesta que tuvo una tendencia ascendente fue el “nada satisfecho”, registrando su puntaje más alto en 2020, un año después de que se produjese el estallido.

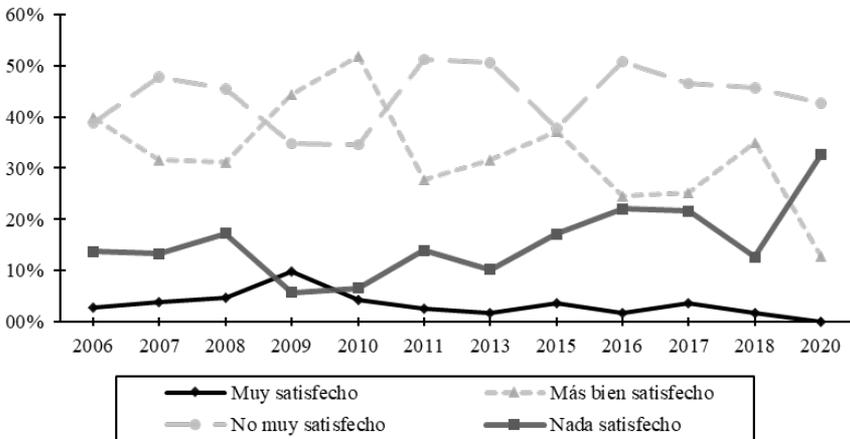
Figura 1: Participación electoral en Chile (2005-2017)



Fuente: Elaboración propia con datos de Contreras Aguirre y Morales Quiroga (2014).

Nota: La línea punteada representa el cambio de voto obligatorio a voto voluntario.

Figura 2: Satisfacción con la democracia en Chile

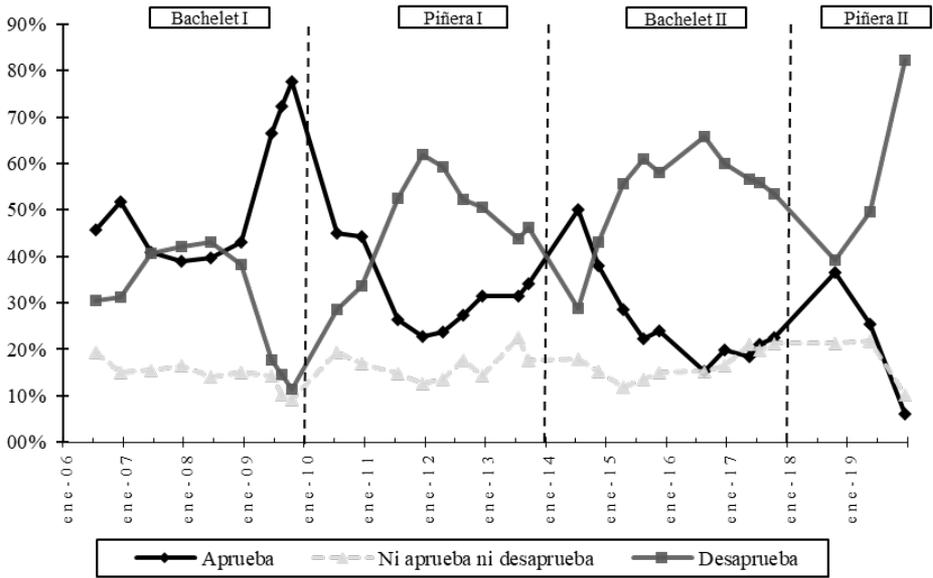


Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro.

Si la satisfacción de la democracia registraba en 2020 los valores más bajos, la aprobación del presidente por su conducción del gobierno, considerando

la Figura 3, contaba con puntajes muy modestos desde hacía más tiempo. Después de los primeros meses del segundo mandato de Michelle Bachelet, la desaprobación siempre estuvo por encima de la aprobación. Los niveles de desaprobación registraron su récord a finales de 2019, cuando Sebastián Piñera tuvo que hacer frente a las movilizaciones más numerosas de la historia de Chile.

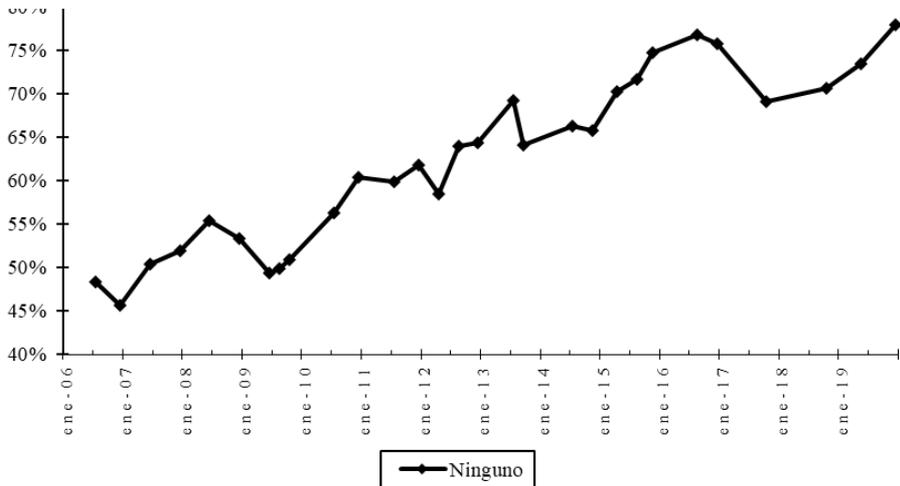
Figura 3: Aprobación de la conducción presidencial del gobierno



Fuente: Elaboración propia con datos de CEP.

De igual modo, la ciudadanía chilena se iba identificando cada vez menos con los partidos políticos. La Figura 4 presenta cómo desde el 2006 la desidentificación partidista, pese a algún año concreto, siempre fue en aumento. Su pico máximo lo alcanzaría en diciembre de 2019, una vez ya se había producido el estallido.

Figura 4: Evolución de la desidentificación partidista



Fuente: Elaboración propia con datos de CEP.

Con todos estos indicadores, se puede comprobar que la existencia de una crisis de representación política coincidía con el año del estallido. Lo ocurrido en los años previos todavía no podía identificarse como una crisis de representación. La apatía, la desafección y el malestar iban impactando cada vez más en la población, y el comportamiento de la clase política, inmersa en el paradigma de “Chile como país modelo”, no había variado demasiado. Entonces la primavera de 2019 supuso un punto y aparte entre una ciudadanía que activó el recurso de la movilización en forma de estallido social para impugnar el orden establecido y una clase política anclada en un paradigma que funcionaba como un «cerrojo cognitivo».

## V. Conclusiones

El paradigma de “Chile como país modelo”, a través del marco ideacional seguido, ha servido para comprender su desempeño a lo largo de los años en Chile y ha sido útil para diferenciar las propias ideas y los diversos actores que formaron parte. Esto es, la idea de “Chile como país modelo” guarda

una evidente relación con la definición que realizaba Campbell sobre el paradigma: “son supuestos cognitivos de fondo que restringen la toma de decisiones y el cambio institucional al limitar el abanico de alternativas que las élites decisorias perciben como útiles y dignas de consideración” (Campbell, 2004, p. 94).

Este artículo ha observado que para que tal idea se pudiese volver hegemónica en el Chile contemporáneo, primero tuvo que existir un proceso de afianzamiento, relacionado con cuatro puntos concretos. El régimen pinochetista pudo introducir la idea mediante la coerción, pero a su vez tuvo la habilidad de envolverlo de legitimidad, lo cual permitía que pudiese sobrevivir una vez finalizó la dictadura. Entendiendo que el principal grupo de la oposición democrática movilizó a la sociedad chilena a partir de objetivos político-institucionales y no económico-sociales (Tironi, 1990), estaba claro que la idea iba a perdurar con la transición. Eso sí, las dinámicas que confluieron en los primeros años de la vuelta de la democracia posibilitaron que el paradigma de “Chile como país modelo” adquiriese otros puntos y ampliase su alcance de la legitimación más allá de la escala nacional. Por ello, de acuerdo con Campbell (2002), la institucionalización de las ideas paradigmáticas genera grupos que las defienden cada vez que son atacadas con posterioridad.

Los cuatro puntos que cimentaron el paradigma fueron: el modelo económico neoliberal, la lógica tecnocrática, el consenso y la estabilidad sociopolítica. Los dos primeros rasgos serían parte de la herencia dictatorial y los dos siguientes emergerían una vez retornó la democracia al país. La dictadura empleó esta idea debido a la necesidad que tenía de legitimarse a nivel interno, juzgando al país no en función de los estándares democráticos, sino económico-técnicos. Esto sobreviviría con la democracia, el desempeño económico como medidor de la legitimación de la democracia, diría Huneus (2014). Mientras tanto, los que serían los elementos post-transicionales, el consenso y la estabilidad, contribuyeron a que dicha idea fuese refrendada en el exterior y permitiese situar a Chile como un caso exitoso

de la globalización neoliberal y casi como una excepción dentro de América Latina.

A partir de 2006, se percibió que los elementos del paradigma de “Chile como país modelo” no calaban de la misma forma en la sociedad. Michelle Bachelet, vista como una figura política renovada, tuvo que hacer frente en el comienzo de su primer mandato a una movilización estudiantil sin precedentes que reclamaba un cambio profundo del sistema educativo chileno. En los siguientes años pudo apaciguar el panorama social con el impulso de diferentes medidas y acabó con unos índices de aprobación que rozaban el 80%, pero al mismo tiempo la desafección política se iba intensificando (Castiglioni, 2010). Mientras tanto, la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia implicaba que la democracia chilena era capaz de asumir la alternancia. Aunque Piñera había sido el impulsor de la moderación de las propuestas de la derecha chilena, su planteamiento eminentemente empresarial (Garretón, 2012) y su lógica *top-down* no le permitían gobernar el país con una visión más pragmática. Las movilizaciones de 2011 y el estilo de negociación de su gobierno fueron un claro ejemplo de ello. Fue una época en la que se percibió una “crisis de baja intensidad” que mutaría en una “crisis de legitimidad sistémica” (Luna, 2016b). El malestar y la apatía se iba apoderando de la sociedad chilena. Los canales de “*accountability* vertical” eran débiles a medida que los propios partidos políticos se alejaban de la sociedad, y en general desde las propias instituciones políticas no había una canalización de los *inputs*.

Ante lo sucedido, la pregunta era si después de lo ocurrido desde la clase política habría una toma de conciencia acerca de las demandas procedentes de la sociedad. El segundo mandato de Bachelet se pudo palpar sobre todo al principio un modo diferente de gobernar al implementar medidas que iban en consonancia con las cuestiones que se reivindicaban en las protestas de 2011. Sin embargo, su reacción quedó empañada por los casos de corrupción que salieron a la luz y también cuando el crecimiento económico iba estancándose, lo que produjo un cambio de narrativa en la propia

presidenta, considerando el “realismo sin reforma” que propugnó. Con la reelección posterior de Piñera en las elecciones de 2017, se instauró el marco de los “tiempos mejores”. Sin embargo, tampoco se lograron encarrilar las políticas implementadas sobre este marco, ya que esa mayoría relativa que había obtenido en 2017 no le permitía impulsar ningún tipo de transformación significativa. Por tanto, el estallido social de 2019 acabó siendo una acumulación de descontento, una total impugnación contra el statu quo.

Lo ocurrido en la primavera de 2019 ponía en tela de juicio los pilares que habían moldeado el paradigma de “Chile como país modelo”. Se había producido, entre otras cosas, eso que Altman (2022) llamaba una “revolución de expectativas crecientes” porque las promesas que se hicieron a través del proceso de modernización eran cada vez más difíciles de cumplir, generando frustración en la población. Además, no habían beneficiado de igual modo a toda la sociedad, más bien todo lo contrario. Previamente, ya se podía comprobar que los niveles de participación electoral eran cada vez más bajos, encuadrándose al país en un abstencionismo estructural, y esa gran insatisfacción también se trasladaba a diferentes medidores de opinión pública, como la satisfacción con la democracia, la aprobación de la conducción presidencial o la desidentificación partidista. En consecuencia, la ciudadanía se sentía que disponía cada vez de una mayor capacidad de agencia.

La desmovilización social que había producido la dictadura, que persistió en los primeros años de democracia, era cada vez menor. Se optaba por otros mecanismos de hacer política que fuesen más allá de la política institucional. Además, en los trece años previos al estallido, se llevaron a cabo destacadas manifestaciones sociales (la “Revolución de los pingüinos”, las marchas de 2011-2012, el movimiento No+AFP, o el Mayo Feminista) que demostraron que la apatía, la desafección y el malestar no condujeron hacia la despolitización ni hacia la desmovilización (Jiménez-Yañez, 2020; Cerro Fernández, 2024).

Por el contrario, el paradigma de “Chile como país modelo” había calado profundamente en la clase política. Los distintos puntos ya mencionados de esta idea seguían siendo esenciales en su forma de hacer política. Algunos eran constreñimientos normativos y otros, más bien, cognitivos. Tal era su grado de permeación que, unos días antes del estallido, Piñera equiparaba a Chile como un “verdadero oasis con una democracia estable” al compararlo con el resto de los países de la región (Cooperativa, 2019). El estallido se produjo entonces por el descontento social con el funcionamiento del sistema económico y político. El clima destituyente que ocasionó la aparición del estallido mostraba una ciudadanía que buscaba discutir y confrontar el equilibrio de poder existente en el país.

Se había generado una crisis de representación debido a que, bajo los preceptos de Mainwaring (2006), existía una ruptura en el *continuum* principal-agente reflejado en las interacciones élite-ciudadanía, dejando de funcionar correctamente la intermediación política. Como apuntaba Luna (2016a), Chile podía catalogarse como un régimen democrático “desarraigado” en tanto contaba con una endeble *accountability* vertical y una fuerte *accountability* horizontal. Era lo opuesto a la democracia “delegativa” conceptualizada por O’Donnell.

Ahora toca pensar en el Chile post-estallido, ya que las perspectivas y los derroteros han cambiado, pero sigue siendo necesario retornar a esos pasados menos recientes.

## Referencias

- Acevedo, C., Jaramillo-Brun, N., & Toro, S. (2016). “Chile, ¿Las reformas en base de cristal?” En J. P. Luna, S. Toro, N. Jaramillo-Brun, & C. Acevedo (Eds.), *Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas, 2014: ¿Tiempo de reformas?* (pp. 73-90). Vanderbilt University, PUC.
- Altman, D. (2006). “Continuidades, cambios y desafíos democráticos en Chile (2006-2009)”. *Colombia Internacional*, (64), 12-33.
- Altman, D. (2008). “Régimen de gobierno y sistema de partidos en Chile”. En A. Fontaine, C. Larroulet, J. Navarrete, & I. Walker (Eds.), *Reforma de los partidos políticos en Chile* (pp. 41-74). PNUD, CEP, Libertad y Desarrollo, Proyectamérica y CIEPLAN.

- Altman, D. (2016). "Informe Especial: La caída del Binominal". En J. P. Luna, S. Toro, N. Jaramillo-Brun, & C. Acevedo (Eds.), *Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas, 2014: ¿Tiempo de reformas?* (p. 127). Vanderbilt University, PUC.
- Altman, D. (2022). "Chile: el país en el que los extremos ya no están de moda..." *Gatopardo*. Recuperado de: <https://gatopardo.com/opinion/chile-plebiscito-extremos/>
- Altman, D., & Toro, S. (2016). "Con el acelerador a fondo: la evaluación de las reformas a un año del gobierno de la Nueva Mayoría". En *Reformas políticas en América Latina: tendencias y casos* (pp. 165-182). Organización de los Estados Americanos.
- Atria, F., Larraín, G., Benavente, J. M., Couso, J., & Joignant, A. (2013). *El otro modelo: del orden neoliberal al régimen de lo público*. Debate.
- Barozet, E., Espinoza, V., & Ulloa, V. (2020). "Elite parlamentaria e instituciones informales en Chile: Nepotismo y clientelismo como formas de sustento del poder". *RES. Revista Española de Sociología*, 29(3), 595-611.
- Berman, S. (2013). "Ideational Theorizing in the Social Sciences since Policy Paradigms, Social Learning, and the State". *Governance*, 26(2), 217-237.
- Bunker, K. (2018). "La elección de 2017 y el fraccionamiento del sistema de partidos en Chile". *Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política*, 9(2), 204-229.
- Campbell, J. L. (2002). "Ideas, politics, and public policy". *Annual Review of Sociology*, 28(1), 21-38.
- Campbell, J. L. (2004). *Institutional Change and Globalization*. Princeton University Press.
- Castiglioni, R. (2005). *The politics of social policy change in Chile and Uruguay: Retrenchment versus maintenance, 1973-1998*. Routledge.
- Castiglioni, R. (2010). "Chile y el giro electoral: 'la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser'". *Revista de Ciencia Política*, 30(2), 231-248.
- Castiglioni, R. (2018). "Explaining Uneven Social Policy Expansion in Democratic Chile". *Latin American Politics and Society*, 60(3), 54-76.
- Castiglioni, R. (2019). "El ocaso del «modelo chileno»". *Nueva Sociedad*, 284(10), 4-14.
- Castiglioni, R., & Rovira Kaltwasser, C. (2016). "Challenges to political representation in contemporary Chile". *Journal of Politics in Latin America*, 8(3), 3-24.
- Castiglioni, R., & Serrano, G. (2018). Reforma de la educación superior chilena: de la protesta al policy-making. Trabajo preparado para el XIII Congreso Chileno de Ciencia Política, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile.
- Cerro Fernández, R. (2024). Del malestar al estallido social (2006-2019): estudio de la crisis de la representación política en Chile [Trabajo Fin de Máster, Universidad Complutense de Madrid].
- Centro de Estudios Públicos. (2019). Encuesta CEP N° 52-84 (2006-2019). CEP. Disponible en: (<https://www.cepchile.cl/>)

- Contreras Aguirre, G., & Morales Quiroga, M. (2014). "Jóvenes y participación electoral en Chile 1989-2013. Analizando el efecto del voto voluntario". *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 12(2), 597-615.
- Cooperativa. (2019). "Presidente Piñera: Chile es un verdadero oasis en una América Latina convulsionada". *Cooperativa*. Recuperado de: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/presidente-pinera-chile-es-un-verdadero-oasis-en-una-america-latina/2019-10-09/063956.html>
- Cruz, F., & Varetto, C. (2019). "Crónica de un cambio anunciado. Las elecciones de 2017 en Chile frente al cambio de sistema electoral". *Estudios Políticos*, (54), 233-258.
- Donoso, S. (2017). "«Outsider» and «Insider» Strategies: Chile's Student Movement, 1990-2014". En S. Donoso & M. von Bülow (Eds.), *Social movements in Chile: Organization, trajectories, and political consequences* (pp. 65-97). Palgrave Macmillan.
- Faletto, E. (1991). "Qué pasó con Gramsci". *Nueva Sociedad*, 115, 90-97.
- Farías, A., & Toro, S. (2020). "Los gobiernos socialdemócratas en Chile. De Lagos a Bachelet y... de nuevo Bachelet". En S. C. Leiras (Ed.), *¿Giro a la izquierda o viraje al centro? Argentina y el Cono Sur, entre la continuidad y el cambio* (pp. 249-272). Editorial Teseo.
- 78
- Faure, A., & Maillet, A. (2018). "Un segundo mandato a medias tintas: balance del gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018)". *Les études du CERI*, (233-234), 34-38.
- Fuentes, C. (2017). *Las nuevas reglas del juego político en Chile: partidos, campañas y probidad*. Fundación Friedrich Ebert.
- Garcé, A. (2015). "El institucionalismo discursivo como oportunidad: La ciencia política latinoamericana y el estado del arte en la literatura sobre el poder político de las ideas". *Política y gobierno*, 22(1), 199-226.
- Garretón, M. A. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*. Editorial Arcis-CLACSO.
- Güell, P. (2019). "El estallido social de Chile: piezas para un rompecabezas". *Mensaje*, 68(685), 8-14.
- Guzmán, E., Fernández, M. Á., & Müller, G. (2017). "De la Concertación a la Nueva Mayoría: comprensión de los cambios y escenarios futuros para las elecciones del 2017". *Análisis*, 17, 1-23.
- Huneus, C. (2014). *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*. Taurus.
- Jiménez-Yañez, C. (2020). "#Chiledespertó: causas del estallido social en Chile". *Revista Mexicana de Sociología*, 82(4), 949-957.
- Joignant, A. (2011). "The politics of technopols: Resources, political competence and collective leadership in Chile, 1990-2010". *Journal of Latin American Studies*, 43(3), 517-546.
- Latinobarómetro Chile. (2020). Encuesta Latinobarómetro. Latinobarómetro. Recuperado de: <https://www.latinobarometro.org/>

- Londregan, J. B. (2000). *Legislative institutions and ideology in Chile*. Cambridge University Press.
- Luna, J. P. (2016a). "Chile's Crisis of Representation". *Journal of Democracy*, 27, 129.
- Luna, J. P. (2016b). "Por qué la elite política no puede entender lo que quiere la sociedad". *CIPER*. Recuperado de: <https://www.ciperchile.cl/2016/10/21/por-que-la-elite-politica-no-puede-entender-lo-que-quiere-la-sociedad/>
- Luna, J. P., & Mardones, R. (2010). "Chile: are the parties over?" *Journal of Democracy*, 21, 107.
- Luna, J. P., & Toro, S. (2013). *Protesta Social en Chile: causas y posibles consecuencias*. LAPOP.
- Luna, J. P., Toro, S., Jaramillo-Brun, N., Salas, V., & Seligson, M. A. (2012). *Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades*. Vanderbilt University.
- Madariaga, A., & Rovira Kaltwasser, C. (2020). "Right-wing moderation, left-wing inertia and political cartelisation in post-transition Chile". *Journal of Latin American Studies*, 52(2), 343-371.
- Mainwaring, S. (2006). "The crisis of representation in the Andes". *Journal of Democracy*, 17(3), 13-27.
- Mainwaring, S., & Scully, T. R. (1996). "Introducción. Sistemas de Partidos en América Latina". En S. Mainwaring & T. R. Scully (Eds.), *La construcción de instituciones democráticas: sistemas de partidos en América Latina* (pp. 1-28). Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica.
- Mardones, R. (2007). "Chile: todas íbamos a ser reinas". *Revista de Ciencia Política*, 27, 79-96.
- Mardones, R. (2014). "La encrucijada de la democracia chilena: una aproximación conceptual a la desafección política". *Papel Político*, 19(1), 39-59.
- Mascareño, A., Rozas, J., Lang, B., & Henríquez, P. A. (2023). "La Constitución pre-estallido de Michelle Bachelet. ¿Cuánto rinde hoy?" *Puntos de Referencia*, (644).
- Mella, M. (2011). El pensamiento sobre la modernización y la democratización durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. *Revista de Estudios Politécnicos Tékhne*, 9(15), 105-132.
- Morales Quiroga, M., & Contreras Aguirre, G. (2017). "¿Por qué se aprobó el voto voluntario en Chile? Razones y argumentos que impulsaron la reforma". *Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política*, 8(2), 105-138.
- Morán Faúndes, J. M. (2019). "Chile despertó: El modelo chileno, la matriz de desigualdad y la protesta de 2019. Crítica y Resistencias". *Revista de Conflictos Sociales Latinoamericanos*, (9), 54-69.
- Morlino, L. (2007). "Explicar la calidad democrática: ¿qué tan relevantes son las tradiciones autoritarias?" *Revista de Ciencia Política* (Santiago), 27(2), 3-22.
- Moulian, T. (1997). *Chile Actual: Anatomía de un mito*. LOM Ediciones.

- Muller, P. (2005). "Esquisse d'une théorie du changement dans l'action publique". *Revue Française de Science Politique*, 55(1), 155-187.
- Ocampo, J. A. (2020). "La crisis del COVID-19 de América Latina con una perspectiva histórica". *Revista CEPAL-Edición Especial*.
- O'Donnell, G. (2004). "Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política". *Revista Española de Ciencia Política*, 11(1), 11-31.
- Parsons, C. (2007). *How to Map Arguments in Political Science*. Oxford University Press.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1998). Las paradojas de la modernización. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019). Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Roberts, K. M. (2014). *Changing Course in Latin America*. Cambridge University Press.
- Rovira Kaltwasser, C. (2020). "El error de diagnóstico de la derecha chilena y la encrucijada actual". *Estudios Públicos*, (158), 31-59.
- Saavedra, E. (2014). "El modelo económico-político de Chile: Desarrollo institucional en la encrucijada". *Economía y Política*, 1(1), 115-146.
- Segovia, C., & Gamboa, R. (2012). "Chile: El año en que salimos a la calle". *Revista de Ciencia Política* (Santiago), 32(1), 65-85.
- Servicio Electoral de Chile. (2023). Procesos electorales. Servel. Recuperado de: <https://www.servel.cl/centro-de-datos/procesos-electorales-vor/>
- Siavelis, P. M. (2010). "Gabinetes, cuotas, círculos de hierro y el segundo piso: Organización formal e informal del poder ejecutivo en Chile". En *Seminario internacional sobre el parlamentarismo europeo y el presidencialismo latinoamericano cara a cara* (pp. 1-36). Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonomico.
- Siavelis, P. M. (2016). "Crisis of representation in Chile? The institutional connection". *Journal of Politics in Latin America*, 8(3), 61-93.
- Silva, E. (2009). *Challenging Neoliberalism in Latin America*. Cambridge University Press.
- Silva, E. (2019). *The state and capital in Chile: Business elites, technocrats, and market economics*. Routledge.
- Silva, P. (2008). *In the name of reason: technocrats and politics in Chile*. The Pennsylvania State University Press.
- Somma, N. M., & Medel, R. (2017). "Shifting relationships between social movements and institutional politics". En S. Donoso & M. von Bülow (Eds.), *Social movements in Chile: Organization, trajectories, and political consequences* (pp. 29-61). Palgrave Macmillan.
- Tironi, E. (1990). *Autoritarismo, modernización y marginalidad: el caso de Chile, 1973-1989*. Ediciones SUR.

- Titelman, N. (2021). *Cambiar o morir: la crisis terminal de los partidos políticos chilenos*. CIPER Académico / Análisis Político.
- Toro, S., & Mardones, R. (2016). “La acción ciudadana en tiempos de reforma”. En J. P. Luna, S. Toro, N. Jaramillo-Brun, & C. Acevedo (Eds.), *Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas, 2014: ¿Tiempo de reformas?* (pp. 93-112). Vanderbilt University, PUC.
- Undurraga, T. (2012). “Transformaciones sociales y fuentes de poder del empresariado chileno (1975-2010)”. *Ensayos de Economía*, 22(41), 201-225.
- Weyland, K. (1997). “Growth with Equity in Chile’s New Democracy?” *Latin American Research Review*, 32(1), 37-68.